

JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO

CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SECCIÓN SEGUNDA

**MEDIDA CAUTELAR
EXPEDIENTE: 2021 00311**

**ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES- VS.
MARIO ALBERTO GALINDO FERNANDEZ**

Bogotá, D. C., cinco (5) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

Ingresa al Despacho la demanda interpuesta por la apoderada judicial de **la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-** en contra del señor **MARIO ALBERTO GALINDO FERNANDEZ**, para resolver sobre la **MEDIDA CAUTELAR** presentada por la apoderada de la parte actora.

I. MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA:

Con la presentación de la demanda la apoderada de la entidad demandante, la Dra. Angélica Cohen Mendoza, presentó solicitud de medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo demandado en los siguientes términos:

“Solicito se declare la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la Resolución SUB 218948 del 15 de agosto de 2019, por medio de la cual se reconoció una pensión de vejez de alto riesgo al señor MARIO ALBERTO GALINDO FERNANDEZ, sin tener en cuenta que el demandado no cumplía con los requisitos para acceder a una pensión de vejez de alto riesgo de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1047 de 1978, reconociéndose de tal manera una mesada pensional contraria a derecho”.

II. TRÀMITE DE LAS MEDIDAS CAUTELARES:

De la Medida cautelar se corrió traslado a la demandada mediante auto del 27 de septiembre de 2021, por el término de cinco (5) días, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 233 del C.P.A.C.A., y S.S. para lo cual se corrió el traslado respectivo por secretaría el 14 de octubre de 2021, el que fue descrito por el actor el 26 de octubre de 2021 (archivo 5 del cuaderno de medidas cautelares).

En el escrito que describe el traslado de la solicitud de medida cautelar, el apoderado del demandado manifiesta que esta carece de fundamento fáctico y jurídico,

pues se debate la legalidad de un acto administrativo que hasta la fecha goza de fuerza ejecutoria y presunción de legalidad, aunado a que este acto motivado es susceptible o no de ser revocado por la administradora, situación que indica, deberá ser debatida y decidida de fondo dentro del proceso contencioso en curso y no de manera anticipada o preliminar, como pretende la entidad actora.

De igual manera, indica que el demandado aportó las pruebas necesarias para ser tenidas en cuenta por Colpensiones, con el fin de acceder a la pensión de vejez por alto riesgo, puesto que cumplía con los requisitos mínimos para acceder a ella, ahora bien asegura el apoderado de la parte demandada, que la entidad actora alegando a favor de su propio error en culpa ajena, no puede pretender el desconocimiento abrupto de un acto motivado, puesto que el demandado actuó bajo el principio de buena fe y confianza legítima en la actuación pública.

Expone que el Consejo de Estado, ha indicado que el principio de confianza legítima se encuentra depositada en cabeza del afiliado pensionado y que corresponde a la entidad comprobar lo contrario, allegando elementos suficientes de juicio, con el fin de demostrar la irregularidad que llevo a generar el acto administrativo. Y que para las altas cortes es una situación aún debatida, ya que ratifican la imposibilidad de suspender provisionalmente al menos mientras no se demuestre un actuar delictivo por parte del afiliado para la obtención del derecho pensional, y que para el presente caso esto no ha sido demostrado por la entidad demandante.

Y en caso de resolver favorablemente esta solicitud, se estaría causando un perjuicio irremediable para el accionado, puesto que se trata de un pago periódico que constituye garantía del afiliado para cubrir su mínimo vital y para su núcleo familiar, diferente es el caso en el que se encuentra Colpensiones, asegura el apoderado del demandado, ya que esta entidad, cuenta con medios idóneos, herramientas jurídicas y legales para efectuar el cobro correspondiente.

Por lo anterior, solicita el apoderado del señor Mario Alberto Galindo Fernández, al Despacho negar el requerimiento de medida cautelar, tendiente a la suspensión del pago de la mesada pensional, garantizando los principios fundamentales del derecho al trabajo y a la seguridad social, como la favorabilidad, debido proceso, acceso a la seguridad social con conexidad al mínimo vital, indubio pro-operario, como lo contemplan los artículos 48 y 53 de la Constitución Política de Colombia.

III. PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

De conformidad con el artículo 230 del C.P.A.CA., las medidas cautelares pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión y deben tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda.

Dentro de las medidas cautelares que podrán ser adoptadas por el Juez, se encuentra la establecida en el numeral 3 del artículo 230 del C. PA.CA, la cual, se refiere a la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo. Sin embargo, para la adopción de dicha medida, se requiere el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 231 de la norma ibídem, el cual a la letra dice:

“Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por **violación de las disposiciones invocadas** en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. (subrayado fuera de texto) En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos: (...)

Ahora bien, el numeral 3 del artículo 230 del C.P.A.C.A. contempló como medida cautelar la suspensión de los actos administrativos, la que se encuentra condicionada a que el acto acusado contrarie de manera clara, ostensible, flagrante o manifiesta lo dispuesto en normas superiores; violación que se debe constatar con el simple cotejo de las normas que se confrontan o mediante documentos públicos aducidos en su solicitud, pues al requerirse un estudio de fondo, el juez debe agotar el procedimiento y diferir el pronunciamiento sobre la validez del acto acusado para el momento en que se dicte sentencia.¹

Así uno de los requisitos exigidos en la norma aludida, es la sustentación expresa de la petición, aspecto que fue ratificado por el Consejo de Estado inclusive desde antes de la expedición de la nueva codificación contencioso administrativa, como se observa en providencia de enero 23 de 2003, Consejero Ponente Doctor Mario Alario Méndez, Expediente No. 3069, donde se especifica:

“...Entonces, para sustentar la solicitud de suspensión provisional, han de indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de violación, de modo expreso, como es la exigencia legal. Ello significa que para el efecto no es bastante la indicación de las normas violadas y la explicación del

¹ Consejo de Estado Auto 21845 fe.7/2002 M.P. Alíer Eduardo Hernández Enríquez

concepto de violación que se haga en la demanda como fundamento de sus pretensiones. No. La sustentación de la solicitud de suspensión provisional se repite, ha de hacerse de modo expreso, porque es exigencia legal.

Cabe señalar, sin embargo, como se ha explicado muchas veces, que el requisito de sustentar de modo expreso la solicitud de suspensión provisional se satisface con la remisión que se haga en la solicitud al capítulo de la demanda concerniente a las normas violadas y al concepto de la violación, criterio que en esta ocasión se reitera. Siendo, pues, que el demandante para el efecto se remitió a las normas legales citadas y al concepto de violación explicado en la demanda, debe entenderse cumplido el requisito legal(...)'²

Bajo los presupuestos enunciados, se resolverá la medida cautelar de suspensión de los efectos del acto administrativo demandado. Es así como, la apoderada de la parte actora – ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, señala que debe declararse la suspensión provisional de la Resolución: *SUB 218948 del 15 de agosto de 2019* por medio de la cual la Colpensiones, reconoce una pensión de vejez de alto riesgo al señor Mario Alberto Galindo Fernández, sin que este cumpliera los requisitos que exige la ley.

En esta forma, analiza el Despacho que son varias las inconformidades que presenta la entidad demandante con ocasión a la expedición de la Resolución *SUB 218948 del 15 de agosto de 2019* por medio de la cual, se reconoce una pensión de vejez de alto riesgo al señor Mario Alberto Galindo Fernández, de un lado, la falta de cumplimiento a los requisitos establecidos en el Decreto 1047 de 1978, pues a sentir de la entidad, al momento de la causación del derecho <<con la acreditación de 16 años de servicio continuos en el DAS y el cumplimiento de 50 años de edad>>, el beneficiario de la prestación deberá desempeñarse como funcionario del DAS para aquel momento, aspecto que a su sentir no fue cumplido por la parte actora, ya que la vinculación de este con el DAS, feneció el 27 de diciembre de 2005 y posterior a aquel momento, comenzó a laborar en otras entidades en las que no desempeñan actividades de alto riesgo.

El planteamiento atrás abordado no conlleva a determinar a simple vista una violación inmediata, ostensible, flagrante o manifiesta a normas superiores que ameriten el decreto de una medida previa, pues como la misma entidad lo indica y prueba dentro del expediente, el demandado estuvo vinculado en el DAS entre el 29 de abril de 1988 y el 28 de diciembre de 2005, cumpliendo con los 16 años establecidos en el artículo 2 del Decreto 1047 de 1978, desempeñando sus funciones como DETECTIVE., entonces, la discusión se gobernará en delimitar una aparente

² Consejo de Estado, sentencia del veintitrés (23) de enero de dos mil tres (2003), exp: 3069. M.P.: Mario Alario Méndez.

interpretación de la norma, en aras de determinar si al momento de la causación del derecho, el señor Mario Alberto Galindo Fernández, debía seguir desempeñándose como funcionario del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS, para tener derecho a esa pensión de alto riesgo; para ello, deberá ser revisada las pruebas arrimadas al expediente, las normas propias que rigen la materia, los pronunciamientos jurisprudenciales frente al tema y, la posición que ha tomado la entidad, que según lo informado fue plasmada en el concepto 2014-6115110 del 29 de julio de 2014, lo cual, implica concluir que no se desprende una violación a simple vista del acto administrativo.

De la misma forma la entidad plantea que el tiempo certificado como ALUMNO DE ACADEMIA, es decir para el caso concreto del 29 de abril de 1988 al 30 de octubre de 1988, no ha debido ser tomado en consideración para el reconocimiento de la pensión especial de VEJEZ DAS, aspecto que también deberá ser objeto del debate probatorio que se de en el proceso, en aras de determinar, si el tiempo en que los empleados del EXTINTO DAS se desempeñen como alumnos de academia, debe ser o no tenido en cuenta para el reconocimiento de la prestación.

Es así, que el acto administrativo acusado a simple vista no permite la conclusión inmediata de una violación, ostensible, flagrante o manifiesta a normas superiores que ameriten el decreto de una medida previa. Al efectuar en especial el cotejo de las normas que se confrontan, no se vislumbra con claridad que requisitos no cumple el demandado, pues existe discusión frente al momento en que deben ser reconocidos los mismos y si esos requisitos han debido ser acreditados al momento de la causación del derecho; es así como no se puede extraer bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad de las pruebas aportadas y la sustentación de la medida cautelar, que deba decretarse la medida cautelar solicitada.

La decisión de suspensión requiere un estudio de fondo, en el cual el Juez agote el procedimiento y realice el respectivo juicio de ponderación en aras de establecer la validez del acto acusado *SUB 218948 del 15 de agosto de 2019*, junto con los demás documentos anexados contenidos en el expediente administrativo del actor al momento en que se dicte sentencia. Se debe agregar, que la entidad actora no demostró que la medida cautelar fuera urgente para conjurar o evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

En este sentido y siendo que la medida cautelar solicitada no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 230 y 231 del C.P.A.C.A. EL JUZGADO

VEINTIUNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia,

IV. RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la medida cautelar de suspensión provisional de los actos administrativos demandados y su respectivo restablecimiento económico, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Se reconoce y se tiene al Doctor MARIO FELIPE ARIAS VEGA, identificado con la C.C. 94.537.627 de Cali y T.P. 228603 del C.S.J., como apoderado judicial del señor MARIO ALBERTO GALINDO FERNANDEZ, parte demandada en este proceso, en los términos y para los efectos del memorial poder aportado (archivos 7 y 8 del Cuaderno de Medidas Cautelares).

TERCERO: NOTIFÍQUESE de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del C.P.A.C.A, a los correos electrónicos de las partes siendo estos: notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co y paniaguacohenabogadossas@lydm.gmail.com (parte actora) y maralgalf@hotmail.com (parte demandada).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

**ROSSE MAIRE MESA CEPEDA
JUEZ**

DMR

Firmado Por:

Rosse Maire Mesa Cepeda
Juez Circuito
Dirección Ejecutiva De Administración Judicial
División De Sistemas De Ingeniería
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **80fd7287ab293749acd673e42d3ce590e7b39ebd89a050874faf04cce6a81c1c**

Documento generado en 05/11/2021 11:32:34 AM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>